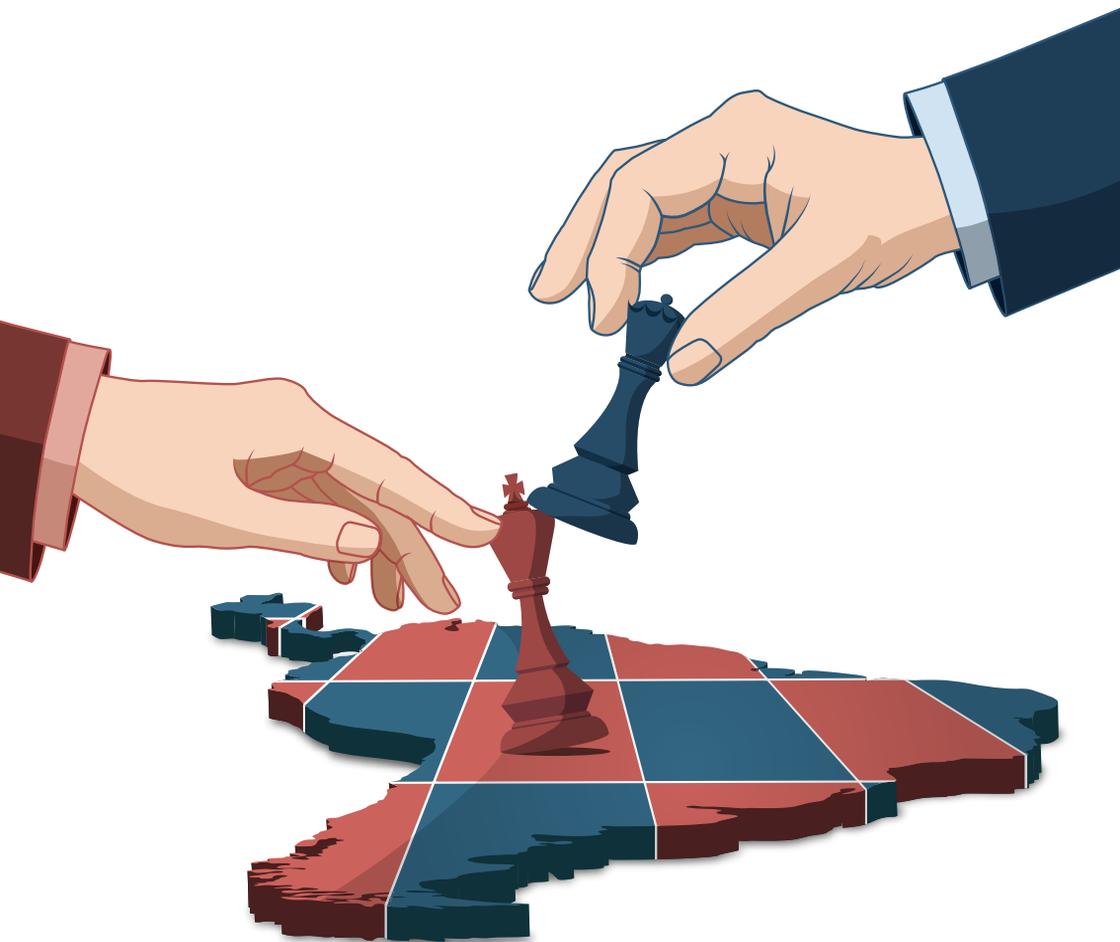


ECUADOR

Debate 122



Élites y derechas en América Latina

AGOSTO | 2024

Élites y derechas en América Latina

Comité Editorial

Alberto Acosta, José Laso Rivadeneira, Simón Espinoza, Fredy Rivera Vélez,
Marco Romero, Hernán Ibarra, Rafael Guerrero, Eduardo Gudynas

Directores

Francisco Rhon Dávila (1992-2022)

José Sánchez Parga (1982-1991)

Coordinadora/Editora

Lama Al Ibrahim

Asistente Editorial

Gabriel Giannone

ISSN: 2528-7761

ECUADOR DEBATE

Diego Martín de Utreras N28-43 y Selva Alegre

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Telf: 2522763 - 2523262

E-mail: revistaed@caapecuador.org

www.caapecuador.org/revista-ecuador-debate

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

Exterior: USD\$. 51.00

Ecuador: USD\$. 21.00

Ejemplar suelto exterior: USD\$. 17.00

Ejemplar suelto Ecuador: USD\$. 7.00

Portada y diagramación

David Paredes

Impresión

El Chasqui Ediciones

Ecuador Debate, es una revista especializada en ciencias sociales, fundada en 1982, que se publica de manera cuatrimestral por el Centro Andino de Acción Popular. Los artículos publicados son revisados y aprobados por los miembros del Comité Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de *Ecuador Debate*.

Se autoriza la reproducción total o parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente: © ECUADOR DEBATE. CAAP.

| ÍNDICE

COYUNTURA

- Estados Unidos 2024: elecciones políticas o guerra cultural**
¿Un dilema coyuntural o una corriente profunda? 5-26
Fernando Bustamante
- La derecha al poder en la Argentina (1983-2023):**
los casos de Propuesta Republicana (PRO) y La Libertad Avanza (LLA) 27-41
Santiago C. Leiras
- Conflictividad socio-política**
Marzo – Junio 2024 43-56
David Anchaluisa

TEMA CENTRAL

- Presentación del Tema Central: Élités y derechas en América Latina** 57-62
Miguel Ruiz Acosta
- La derecha peruana y su deriva neogolpista** 63-78
Anahí Durand Guevara
- Antipopulismo y radicalización de las derechas en Ecuador** 79-99
Franklin Ramírez Gallegos
- Dominación y conflicto político del uribismo en Colombia. 2002-2010** 101-125
Alexander Gamba Trimiño
- La derecha en México: entre el Yunque y Vox** 127-142
Hugo Sánchez Gudiño

De Macri a Milei: la peligrosa obsesión de las clases dominantes argentinas	143-161
Andrés Tzeiman	
La internacional reaccionaria y su influjo sobre América Latina	163-178
Ariel Goldstein	

DEBATE AGRARIO

Jóvenes indígenas: propósitos y desafíos	179-191
Luis Alberto Tuaza Castro y Rudi Colloredo-Mansfeld	

ANÁLISIS

La cadena del reciclaje: aportes sociales, económicos y ambientales. El caso de la Asociación "17 de septiembre" en Portoviejo	193-209
Xavier León-Vega, María Fernanda Solíz, Claudia Rodríguez y Alía Yépez	

RESEÑAS

La (des)regulación de la riqueza en América Latina. Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia	211-214
Danilo Rosero	
Pensamiento agrario: derribando mitos. Una antología de la obra de Fausto Jordán	215-219
Pablo Ospina Peralta	

La derecha peruana y su deriva neogolpista

Anahí Durand Guevara*

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar la práctica política de la derecha peruana, signada por su carácter conservador, tendencia autoritaria y una cerrada defensa del modelo neoliberal que, en el reciente contexto de crisis política, deriva en una postura neogolpista. En primer lugar, ensayamos una caracterización de la derecha tensionada por un conservadurismo estamental autoritario y por la adhesión al neoliberalismo como modelo de gobierno y sociedad. En segundo lugar, abordamos su accionar en la coyuntura abierta en el 2021 con la derrota electoral de Keiko Fujimori y el triunfo de Pedro Castillo, que socava el ya deteriorado sistema democrático. Finalmente, analizamos la consolidación de una derecha neogolpista, abocada a destituir al presidente constitucional y respaldar a Dina Boluarte como mandataria designada.

Introducción

La profunda crisis política que atraviesa el Perú ha tenido a la derecha entre sus principales protagonistas. Sea en su versión fujimorista, emergente provinciana, o de ultraderecha empresarial, los grupos políticos situados en el espectro conservador del campo político –que calificamos ampliamente como “derecha”– comparten características que han impactado directamente en el colapso de la democracia, asumiendo una posición abiertamente favorable a los denominados “neogolpismos”.

Desde una mirada general, puede afirmarse que en el país la derecha se ha caracterizado por preservar una herencia colonial que avala un orden desigual de privilegios sustentados en condiciones económicas, sociales e incluso étnico raciales. Presenta también una tendencia autoritaria, expresada en su débil compromiso con la democracia, tal como lo demostró –entre otras ocasiones– al respaldar el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Durante los diez años de fujimorismo, la derecha fue parte activa del régimen, impulsando las reformas estructurales dictadas por el consenso de Washington y obteniendo

* Socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.

grandes ganancias en el trayecto. Muestra también un carácter patrimonialista, tendiente a utilizar los recursos del erario como propios, involucrándose frecuentemente en casos de corrupción que han llevado a juicio a líderes políticos y grupos empresariales.¹ En tiempos más cercanos, vale destacar su ortodoxia neoliberal y su cerrada defensa de las políticas económicas impuestas durante la dictadura fuimorista de los noventa.

Justamente, desde 1992 y por casi tres décadas, los grupos políticos del campo conservador peruano consiguieron manejar la política económica con amplia discrecionalidad, manteniendo ventajas y privilegios del uso del aparato estatal y los recursos naturales. La caída de Alberto Fujimori no significó mayores alteraciones, por el contrario, acomodaron su accionar al nuevo período democrático respaldando a los sucesivos presidentes electos por voto popular. El crecimiento macroeconómico y los altos precios de los *comodities* en el mercado internacional reforzaron la percepción de una sociedad controlada donde la derecha había logrado consolidar su hegemonía. Si bien se sucedían conflictos sociales en los Andes y la Amazonía, eran esporádicos y fragmentados, sin representar una amenaza grave al modelo. Tampoco tomaban demasiado en serio la grave crisis política –que se gestaba con intensidad enfrentando los poderes del Estado– ni la devastadora pandemia, que acrecentó la indignación de las mayorías contra los grupos dominantes.

Ensimismada en sus sueños hegemónicos, la derecha peruana no vio venir la derrota de Keiko Fujimori ante el maestro rural Pedro Castillo en las elecciones presidenciales del 2021. El triunfo de un serrano, sindicalista y rondero con el voto del país plebeyo que exigía cambios de fondo a décadas de neoliberalismo fue un balde de agua helada y activó todas sus alarmas. Fueron adoptando así una postura “neogolpista” que declaró un inexistente fraude electoral y se abocó a boicotear el nuevo gobierno, al que consideraban una amenaza a sus intereses.

Tal como anotan Tzeiman y Martuscelli (2024), frente a gobiernos democráticos que amenazan con desobedecer los dictámenes impuestos por las clases dominantes, surgen modos novedosos de producir quiebres para alterar la dinámica institucional. Antes que fuerzas militares operando para derrocar gobiernos, encontramos nuevas formas de golpe de Estado realizadas por vías alternativas. La intrusión del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, junto con la persecución de líderes políticos por parte del Poder Judicial en connivencia con los grandes

¹ Para profundizar sobre la corrupción en el Perú y sus vínculos con el poder empresarial puede verse, por ejemplo, a Quiroz, 2013.

medios de comunicación y los grupos de poder económicos –conocido como *lawfare*– constituyen en el siglo XXI las nuevas modalidades de quiebre de los sistemas democrático- institucionales. Este neogolpismo fue asumido por la derecha peruana para derrocar el gobierno de Pedro Castillo y colocar una autoridad subordinada a sus fines.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la práctica política de la derecha peruana, signada por su carácter conservador, tendencia autoritaria y una cerrada defensa del modelo neoliberal que, en el reciente contexto de crisis política, deriva en una postura neogolpista. En primer lugar, ensayamos una caracterización de la derecha tensionada por un conservadurismo estamental autoritario y por la adhesión al neoliberalismo como modelo de gobierno y sociedad. En segundo lugar, abordamos su accionar en la coyuntura abierta en el 2021 con la derrota electoral de Keiko Fujimori y el triunfo de Pedro Castillo, que socava el ya deteriorado sistema democrático. Finalmente, analizamos la consolidación de una derecha *neogolpista*, abocada a destituir al presidente constitucional y respaldar a Dina Boluarte como mandataria designada.

En momentos en que las propuestas de derecha y extrema derecha toman fuerza en Latinoamérica, es fundamental analizar su accionar en Perú como representativo de fuerzas conservadoras que progresivamente abandonan las formas democráticas. Se trata de renovadas formas de alteración de la voluntad popular que complejizan el concepto de “golpes de Estado” tradicionales mediados por el uso de la fuerza, llevándonos a nuevos quiebres, caracterizados por el manejo de la legalidad y la justicia a favor de los grupos de poder. Con el posicionamiento neogolpista, la derecha logra reeditar privilegios, desconociendo y manipulando su propia legalidad y también imponiéndose violentamente sobre los sectores populares cuando se movilizan contra la inminente alteración del régimen. Esperamos que este texto pueda aportar a un análisis de mayor alcance y profundidad sobre el accionar de las derechas y el desafío de fortalecer democracias sustantivas que, más allá de lo procedimental, logren cumplir viejas promesas de igualdad y bienestar.

Entre la nostalgia colonial y la cerrazón neoliberal

En su clásico libro *Clases, Estado y Nación*, Julio Cotler señala el carácter conservador de las clases dominantes del virreinato del Perú, las mismas que mantuvieron hasta el final su lealtad con la corona. Mientras los criollos del Río de La Plata, Caracas o Nueva Granada se levantaban contra el régimen colonial, las principales ciudades del Virreinato peruano sufragaban al ejército realista y

engrosaban sus filas. Así ocurrió en la batalla de Ayacucho, donde el número de oficiales leales al rey de origen peruano era una abrumadora mayoría en contraste con el número reducido presente en el bando patriota, liderado por oficiales venezolanos, colombianos y argentinos. Concluidas las guerras de independencia, a falta de una clase política “peruana”, los jefes de los ejércitos libertadores tuvieron que hacerse cargo de la naciente república (Cotler 1978).

Los grupos que se turnaron el gobierno las primeras décadas de vida republicana no dudaron en considerarse herederos de la dominación española. Tal como afirma Aníbal Quijano, se configuró un patrón de dependencia, colonial primero y neocolonial después, expresado en la continuidad de dos aspectos claves: la dependencia externa del país respecto de un centro de poder mundial y las jerarquías sociales a través de una clasificación racial (Quijano 2000). El grupo criollo gobernante heredó el carácter estamental del régimen colonial y afianzó el patrimonialismo, que no distingue entre el bolsillo privado y el tesoro público. El racismo, el patrimonialismo y el autoritarismo fueron características de una oligarquía conservadora que se turnó el gobierno en alianza con caudillos militares.

La derrota en la guerra con Chile, con la pérdida de territorio y decenas de miles de muertos, llevó a que los actores políticos e intelectuales se plantearan la precaria estructuración del Estado nación peruano, cuestionando que mantuviera a la mayoría de su población, básicamente indígena, sumida en el atraso. Desde el espectro crítico que reclamaba por profundas transformaciones se elevaron voces como la de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. Desde el campo conservador, pensadores como José de la Riva Agüero plantearon una regeneración del país desde el rescate del pasado colonial y las tradiciones hispanistas. También se sumaría la voz de Víctor Andrés Belaunde, líder del social cristianismo en el Perú que abogaba por una “síntesis” de la cultura occidental española y la cultura andina, aunque sin complejizar el dominio ejercido por la primera sobre la segunda. Ambos pensadores serían claves en la construcción de los partidos políticos del espectro conservador, como el Partido Popular Cristiano (PPC) y Acción Popular (AP).

Durante toda la primera mitad del siglo XX la elite gobernante impuso una democracia restringida que dejó fuera a las clases populares, al punto que para 1930 la participación electoral apenas alcanzaba al 7% de la población total (López 2010). A ello se sumaba un régimen económico dependiente, donde el arcaico sistema de hacienda convivía con el naciente capitalismo industrial. La sociedad peruana reclamaba profundas transformaciones y las élites se negaban a ceder privilegios. Paradójicamente, fue el gobierno militar de Juan Velasco Al-

varado el que llevó a cabo las transformaciones democratizadoras que el país requería; entre 1968 y 1977 el gobierno militar puso en marcha un ambicioso proyecto de reformas estructurales, incluyendo nacionalizaciones y estatizaciones que ampliaron la función de producción del Estado. Velasco además ejecutó una radical reforma agraria que redistribuyó la tenencia de la tierra y eliminó poderes locales como el gamonalismo, acabando con la servidumbre que afectaba a la población que vivía en las haciendas. Estas medidas fueron reafirmadas en la Constitución de 1979 que por primera vez consagró el voto universal incluyendo los analfabetos.

Tras la crisis del proyecto nacionalista industrializador impulsado por Velasco Alvarado, y su colapso total durante el primer gobierno de Alan García, los neoliberales peruanos tomaron iniciativa. No sólo consiguieron mostrarse como alternativa de gobierno ante la crisis política y la crisis económica hiperinflacionaria, también consiguieron presentarse como un proyecto capaz de reestructurar el campo político, debilitando algunas tensiones y fortaleciendo otras. Siguiendo a Adrián (2017), fue Hernando de Soto quien con su libro *El otro Sendero* (1986) consiguió trazar esta nueva frontera política, que a la larga se volvería hegemónica. De Soto descarta la dicotomización hegemónica del espacio social entre explotadores y explotados para proponer una nueva frontera en torno a la ley y la exclusión-inclusión de los nuevos actores con respecto a ella. Para de Soto, proletarios y burgueses –o si se quiere trabajadores y empresarios– dejan de ser actores antagónicos para convertirse en aliados que combaten codo a codo por ingresar a la campana de cristal de la legalidad, logrando con ello surgir en el mercado.

Tanto la derecha tradicional como la neoliberal terminarían avalando el autogolpe de Fujimori en 1992 que permitió alinear al país con los mandatos del Consenso de Washington. El neoliberalismo peruano se instaló en lo ideológico, lo programático y lo societal, limitando al Estado a su función de promotor de la inversión privada, desarrollando una legislación y una arquitectura estatal favorable al libre mercado y expandiendo una racionalidad individualista que, en nombre del emprendedurismo, alentaba la informalidad y justificaba la desprotección social. Todo esto en un contexto de postconflicto armado interno y crisis de las organizaciones sociales que pulverizó las mediaciones, abonando al individualismo. La Constitución de 1993 colocó mayores candados a las reformas neoliberales y la derecha peruana pudo participar del festín de privatización de empresas y recursos públicos con sendas dosis de colusión y corrupción.

La caída del fujimorismo en el 2000 golpeó fuertemente a la derecha, que se encontraba muy cómoda gobernando y haciendo negocios durante la dictadura.

No obstante, lograron reacomodarse con el candidato Alejandro Toledo, quien junto a su ministro de economía Pedro Pablo Kuczynski garantizaban la absoluta continuidad del modelo. Si bien las demandas embalsadas en diez años de dictadura y la ortodoxia neoliberal jugaron contra Toledo generando un rechazo popular, la amenaza de un joven Ollanta Humala que cuestionaba el sistema y amenazaba con volver a la Constitución de 1979 llevaron a un cierre de filas en defensa del sistema. Posteriormente apoyarían a Alan García durante las elecciones del 2006; finalmente, del APRA antiimperialista no quedaba nada.

Con el apoyo a Alan García y el rápido alineamiento de Ollanta Humala, que abandonó a los pocos meses de gobierno su predica electoral radical, la derecha peruana del siglo XXI logró consolidarse como bloque hegemónico en el poder. Consiguió un férreo consenso en torno a sus intereses de clase, avalado por los grandes medios de comunicación corporativos que presentaban su proyecto como lo mejor para el Perú. Esporádicamente, tal hegemonía era interrumpida por conflictos sociales en territorios andinos y amazónicos, descontentos ante la profundización del extractivismo, pero eran presentados como asuntos de resentidos radicales. Protestas como el Paro Amazónico, la masacre de Bagua o las protestas en Cajamarca fueron brutalmente reprimidas, sacando a relucir la mencionada raigambre clasista, racista y autoritaria de las élites.

Haciendo un intento por agrupar políticamente las fuerzas que componen la derecha peruana de las últimas décadas, encontramos cuatro grupos. El primero lo conforman los partidos sobrevivientes del siglo XX, específicamente Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. El segundo, y quizá el más importante, es el partido Fuerza Popular que reivindica la dictadura de Alberto Fujimori, es dirigido por su hija Keiko y tiene un alcance nacional que los ha llevado a la segunda vuelta presidencial tres veces consecutivas. Un tercer grupo lo forma la llamada derecha “emergente”, con personajes provincianos como Cesar Acuña de Alianza para el Progreso (APP) o José Luna de PODEMOS, dueños de universidades, empresas de transporte o farmacias, que generalmente se jactan de haber amasado una fortuna con su esfuerzo, aunque varios enfrenten denuncias por vínculos con el narcotráfico. Finalmente, se cuenta una extrema derecha conservadora en lo social y defensora del neoliberalismo económico, con personajes como el empresario Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

Este conglomerado de fuerzas conservadoras, con sus respectivos líderes y vínculos con el mundo empresarial, ignoraron la crisis política y subestimaron los efectos devastadores de la pandemia. Aferrados a la teoría de “cuerdas separadas” (Thorne 2019) –según la cual se podía preservar la política económica, aunque el sistema

político se deteriorara y el malestar social se impusiera en la ciudadanía-, calcularon que las elecciones presidenciales del 2021 mantendrían el gobierno. Por eso el triunfo del candidato “antisistema” Pedro Castillo fue una verdadera sorpresa para ellos.

Crisis política y derrota electoral; adiós a las formas democráticas

Desde 1992 y por casi treinta años consecutivos, la derecha peruana consiguió una importante hegemonía económica, política y social que le permitió mantener el control de los poderes del Estado. Con una sociedad fragmentada y sin mediaciones legitimadas, consolidó lo que Francisco Durand denomina una “república empresarial”, donde la precariedad política era compensada por el apoyo del bloque económico nacional-internacional y por la acción de los poderes fácticos, unidos por el común interés en desarrollar la economía de mercado y fortalecer a los oligopolios (Cosamalón y Durand 2022).

Seguros de la hegemonía conseguida, subestimaron la grave crisis de régimen que se venía gestando y que estalló con mayor nitidez desde el 2016 cuando Keiko Fujimori perdió la elección presidencial ante Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero consiguió una hipermayoría en el Congreso. Desde entonces, el fujimorismo utilizó el Parlamento para cambiar el régimen político y en la práctica imponer un parlamentarismo. El Congreso adquirió cada vez mayor centralidad, siendo la instancia que designa integrantes de instituciones claves como la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales. Es el Congreso también el que decide cuándo usar figuras como la “vacancia por incapacidad moral”² para destituir al presidente de la República. Y es el Congreso quien designa los miembros del Tribunal Constitucional, encargado de delimitar el uso de la vacancia y otras facultades parlamentarias, generalmente dándole la razón.

Desde el Parlamento, el fujimorismo y sus aliados se abocaron a obstaculizar el gobierno de PPK, quien además estaba involucrado en el caso *Lava Jato* por negociados de sus empresas cuando fue ministro de economía. Ante una inminente moción de vacancia, la renuncia de Kuczynski intensificó la crisis. El vicepresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia desarrollando un corto período marcado por la confrontación con el Parlamento. Vizcarra optó por cerrar el Congreso, aunque paradójicamente los nuevos congresistas lo destituyeron a él. Tras una componenda de la ultraderecha, el congresista Manuel Merino fue proclamado

2 La vacancia por incapacidad moral fue incluida en la Constitución de 1993 para casos graves de enfermedad o salud mental, pero desde el 2000 empezó a usarse a discrecionalidad de la mayoría parlamentaria.

presidente, pero su elección generó tal rechazo que renunció a los cuatro días. El Parlamento designó como presidente transitorio a Francisco Sagasti, casi con la exclusiva tarea de organizar las elecciones generales del 2021.

Todas estas maniobras incrementaron el repudio de los sectores populares frente a la clase política. La pandemia del Covid-19 agravó la situación, golpeando la salud y la economía de los hogares que se encontraban abandonados a su suerte. Las elecciones generales de abril del 2021 actuarían como un catalizador del enorme descontento social y serían un voto de castigo a la derecha. Vale mencionar, además, que el espectro conservador estuvo sobrerrepresentado por seis partidos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta, incluyendo todos los de la tipología presentada (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Acción Popular). Sin duda, esta dispersión de candidaturas fue contraproducente para sus aspiraciones. Tal es así que la primera vuelta electoral dio como ganadores a Pedro Castillo con un 18,9% de los votos y a Keiko Fujimori con el 13,4% de las preferencias electorales (ONPE 2021).

Para el espectro conservador, era una verdadera amenaza la elección de Castillo, con el voto de los sectores más empobrecidos y descontentos con el modelo neoliberal. Las masas populares de cholos, serranos y provincianos, que vivían principalmente en el campo y las ciudades del centro y sur andino, habían elegido a alguien que impugnaba frontalmente el sistema y era directamente uno de los suyos. El maestro y sindicalista había liderado una masiva huelga magisterial en el 2017, y durante la campaña electoral había ofrecido el cambio de la Constitución, encarnando además la exclusión del sistema y el desprecio de las clases dominantes. No era Ollanta Humala, el ex militar con ínfulas de estadista a quien rápidamente cooptaron para sus filas. El riesgo de que ganara la presidencia era demasiado grande, así que optaron por impedir su triunfo, traspasando incluso las normas democráticas.

Durante la segunda vuelta electoral, la derecha desató una cruenta batalla con el respaldo de los grandes medios de comunicación y grupos empresariales alineados con la candidata Fujimori. El “terruqueo” estuvo a la orden del día por parte de políticos y periodistas que acusaban a Castillo y su entorno de vínculos con grupos como Sendero Luminoso, siempre sin sustento alguno. También salieron a relucir la vena racista y clasista de la derecha, haciendo escarnio y burla del profesor, su familia y sus electores, a quienes presentaban como sucios, peligrosos e ignorantes. La derecha internacional participó bajo la coordinación del escritor Mario Vargas Llosa, organizando acciones como el foro “Amenazas a las democracias” con el auspicio de la Fundación Friedrich Naumann. El evento congregó

a líderes como el venezolano Leopoldo López, quien junto a Keiko Fujimori advirtieron que de ganar Pedro Castillo “Perú se convertiría en Venezuela”.

El 5 de junio del 2021, concluida la segunda vuelta electoral, las autoridades anunciaron el triunfo de Castillo con una ajustada ventaja de cerca de cincuenta mil votos. Los resultados finales fueron mal recibidos por Fujimori que a las pocas horas denunció un fraude, a todas luces, inexistente. Lo que al inicio parecía la pataleta de una mala perdedora se fue revelando como una estrategia para dilatar la proclamación del ganador, socavar la legitimidad de su triunfo y sembrar dudas sobre su futuro gobierno. De forma coordinada, el fujimorismo y sus aliados –estudios de abogados, periodistas, medios de comunicación y empresarios– respaldaron la teoría del fraude y se plegaron a la cruzada contra el “fraudismo castillista”. La determinación de los opositores y su ensañamiento contra los organismos electorales y las misiones de observación internacional, que informaban el normal desarrollo del proceso electoral, fueron un campanazo de alerta sobre cómo la derecha peruana iba perdiendo las formas democráticas.

Los partidos de derecha se unificaron en respaldo a la teoría “fraudista” de Keiko Fujimori y actuaron como voceros políticos. El fujimorismo y Renovación Popular –del ultraconservador López Aliaga– llevaron la batuta sosteniendo que se había registrado fraude en provincias alejadas del sur andino. Los grupos empresariales también aportaron lo suyo, financiando diversas acciones. Es el caso de los estudios de abogados más caros del país que, durante dos semanas, se abocaron a impugnar cerca de doscientos mil votos indígenas y rurales aludiendo malos manejos en las mesas de sufragio. Los servicios fueron registrados como aporte económico a la campaña, de modo que el reporte financiero de Fuerza Popular confirma que cuarenta abogados de reconocidos estudios revisaron actas electorales, brindaron asesoría legal y pagaron las búsquedas en el sistema del Registro Nacional de Identidad (RENIEC) por un monto de US\$ 500.000 (Ojo Público 2021).

Los medios de comunicación jugaron también un rol importante, canales como Willax perteneciente al empresario Erasmo Wong o el grupo El Comercio, de la tradicional Familia Miro Quesada, entre otros medios avalaron la teoría del fraude desatando sendas campañas de desinformación. Por ejemplo, desde el canal Willax, el periodista Beto Ortiz difundió publicaciones de redes sociales donde afirmaba se había detectado personas fallecidas en el padrón electoral de la ONPE, insinuando que existía la posibilidad de un eventual fraude, algo que se sabía falso.³ Días después el programa Cuarto Poder, de América TV, entrevistó

3 Ver: Plataforma You Tube Willax Televisión: <https://n9.cl/vcy6t2>.

a un “criptoanalista” que había creado una fórmula matemática para demostrar un comportamiento anormal de los electores, algo que resultó un escandaloso *fake news* (América TV 2021). También las autoridades electorales fueron blanco de ataques mediáticos, como ocurrió con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas, a quienes periodistas como Philips Butters, conductor de la Radio PBO, llamaba diariamente “terrorista” (Ojo Público 2021).

Por su parte, las distintas misiones de observación electoral, incluyendo a la OEA, presentaron sendos informes que ratificaban la pulcritud del proceso y felicitaban a los organismos electorales peruanos por llevar los comicios con gran profesionalismo (OEA 2021). No obstante, la derecha no cedió y las impugnaciones dilataron la proclamación del nuevo jefe de Estado como nunca había ocurrido en la historia republicana. Los seguidores de Castillo se movilizaron a Lima desde distintas regiones del país para defender su voto. Cientos de maestros, ronderos, campesinos acamparon en las puertas del Jurado Nacional de Elecciones y marcharon por Lima con sus trajes típicos, machetes y sombreros provocando nuevos ataques racistas por parte de la derecha.

Finalmente, luego de semanas de espera y tensa confrontación, Pedro Castillo fue juramentado presidente. La negativa de la candidata perdedora y el espectro de derechas a reconocer su derrota, así como todo lo actuado durante el proceso electoral, evidenciaron con nitidez que las fuerzas conservadoras podían desconocer las reglas de juego democrático, inventar un fraude y socavar las instituciones electorales con tal de no ser derrotadas. Demostró también que partidos políticos, gremios empresariales y medios de comunicación eran capaces de dejar de lado viejas rencillas y articularse en torno a un mismo fin, en este caso, impedir y/o deslegitimar el triunfo de Castillo. La deriva hacia posiciones neogolpistas tomaba fuerza y se hizo más nítida en las acciones que llevaron a cabo para destituir un gobierno constitucionalmente y legítimamente electo.

La derecha “neogolpista” se consolida: destitución de Pedro Castillo

Tal como se ha planteado, una de las características constitutivas de la derecha peruana ha sido su tendencia autoritaria y su escaso compromiso con la democracia, que la ha llevado a respaldar diversos militarismos y golpes de Estado, incluyendo el de Alberto Fujimori en 1992. Con el triunfo de Pedro Castillo, este carácter autoritario toma protagonismo actuando en los márgenes del orden institucional hasta asumir una postura abiertamente neogolpista. Durante los

quince meses del gobierno de Castillo, y los meses posteriores de estabilización de Dina Boluarte, la derecha va a operar sobre las fuerzas institucionales del Estado, como el Parlamento y el Poder Judicial, para derrocar al gobierno y colocar uno favorable a sus intereses, siempre con el apoyo activo del grupo empresarial, la participación de los medios de comunicación y la oportuna intervención de las fuerzas militares y policiales.

Una vez instalado el nuevo gobierno, la derecha peruana consolida las coordinaciones iniciadas durante la segunda vuelta electoral y constituye una “coalición golpista”, entendida como la articulación de poderes institucionales, económicos, mediáticos y judiciales trabajando coordinadamente para destituir a un presidente constitucionalmente electo (Durand 2024). Sobreponiéndose a sus diferencias internas, el espectro conservador supo definir un objetivo común y priorizar sus intereses de clase, pues de por medio estaba la orientación misma de la política económica. Aprovecharon además la débil correlación de fuerzas que sostenía a Pedro Castillo, quien no logró la mayoría calificada necesaria en el Parlamento. El inexperto presidente carecía de nexos con los grupos de poder y se hallaba tensionado por Perú Libre y los partidos aliados, más preocupados por lograr puestos en el gobierno que por asegurarle gobernabilidad; eso lo hacía una pieza fácil de remover. Sabían también que el profe Castillo podía tener la simpatía popular, pero no contaba con una organización que lo defendiera organizadamente en las calles.

El Parlamento tuvo la acción estelar en la deriva neogolpista de la derecha peruana. Desde el Congreso, el fujimorismo tomó iniciativa en reclutar y sellar una alianza parlamentaria con partidos de ultraderecha (Renovación Popular y Avanza País) y de derecha emergente, como Alianza para el Progreso. Este bloque logró controlar la Mesa Directiva y algunas comisiones claves para golpear al nuevo gobierno, como Constitución y Fiscalización. El Congreso abusó además de la figura de “vacancia por incapacidad moral” y en quince meses presentó tres mociones de vacancia contra el Presidente, una cada cuatro meses, todas por supuestos hechos de corrupción sin más sustento que reportajes periodísticos. Por otro lado, intentaron su inhabilitación constitucional, forzando una absurda acusación de traición a la patria por declaraciones de Castillo favorables a la salida al mar para Bolivia. Mecanismos parlamentarios de control que hasta entonces operaban como formalidades se convirtieron en armas para sabotear al nuevo gobierno.

Otro hecho particularmente grave fue la aprobación de la “Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Constitución Política”. Dicha norma modificó la facultad del

presidente para disolver el Parlamento tras dos cuestiones de confianza rechazadas, señalando que solamente el mismo Parlamento podía definir si tales confianzas procedían o no. Fue clave aquí el aval del Tribunal Constitucional electo por el mismo Congreso, que respaldó las decisiones de la mayoría parlamentaria de derecha. Sin consultar a la ciudadanía, el Congreso terminó con el equilibrio de poderes y alteró la Constitución haciendo del Perú un régimen parlamentarista. Los medios de comunicación guardaron conveniente silencio ante este hecho, lo mismo que las fuerzas políticas de centro y centro izquierda que normalizaron la situación y prácticamente no levantaron su voz de protesta.

El Poder Judicial y, especialmente, la Fiscalía de la Nación fueron también actores estelares de la deriva neogolpista. Apenas asumió el cargo como fiscal de la Nación, Patricia Benavides tomó la inédita decisión de investigar a un presidente en funciones reinterpretando a su manera la Constitución de 1993. De acuerdo con el artículo 117 de la Carta Magna, las únicas razones por las cuales el presidente puede ser acusado son: traición a la patria, impedir las elecciones generales o subnacionales, disolver el Congreso o impedir el funcionamiento del Legislativo o de los organismos electorales. No obstante, Benavides –investigada por organización criminal desde diciembre del 2023– presentó una denuncia que no apelaba a ninguna de las causales enumeradas para investigar a un presidente en ejercicio, denunciando a Castillo por supuestamente liderar una “organización criminal”. La Fiscalía acumuló más de sesenta carpetas fiscales contra él, incluyendo a su esposa y su hija, evidenciando la efectividad del *lafware* como herramienta para desactivar a un líder político, imputándole un delito y exponiendo su entorno más cercano como criminal (Tirado 2021).

Los medios de comunicación fueron, nuevamente, un actor clave en esta deriva, ya fuera generando desinformación, campañas de desprestigio o normalizando acciones claramente antidemocráticas de la derecha. En el extremo de la desinformación y la difamación se ubicó Willax, canal de televisión propiedad del empresario Erasmo Wong con varias denuncias por agraviar a políticos y autoridades. Diariamente Willax insultaba y atacaba al presidente, su gabinete y su familia, amplificando presuntas denuncias de corrupción, inventando rumores de golpe de Estado, o dando tribuna a supuestos testigos de hechos de corrupción. Aparentando mayor seriedad, estuvieron televisoras como América TV, Panamericana o Frecuencia Latina, emitiendo sendos reportajes contra Castillo y sus bases como las rondas campesinas. También, merece destacarse al tradicional Grupo El Comercio, trabajando coordinadamente con la Fiscalía para publicar y direccionar las primicias en las investigaciones fiscales contra el presidente.

Un actor que procuró pasar desapercibido pero fue crucial en todo el proceso fue el poder económico empresarial. Justamente, siguiendo lo anotado por Martuscelli (2024), una de las características centrales del neogolpismo es reforzar el capitalismo neoliberal, lo cual implica neutralizar las fuerzas que ponen en cuestión el modelo económico y el *statu quo* en su conjunto. La llegada al poder de Pedro Castillo era una amenaza a ese modelo ya deteriorado por décadas de política ortodoxa, y los empresarios no se pusieron de costado. La CONFIEP, el mayor gremio empresarial del país fue un tenaz opositor, lo mismo que la Conferencia de Empresarios, que por primera vez en su historia desistió de invitar al presidente de la República a su evento anual. Hubo también empresarios militantes como Erasmo Wong, dueño de Willax TV, o de José Luis Silva Martinot, del sector turismo, que junto a otros financiaron acciones a favor de la vacancia como marchas y movilizaciones minoritarias, pero debidamente amplificadas por los medios con altas dosis de racismo y clasismo.

Todas estas acciones –ocurridas en el límite o en clara transgresión de la institucionalidad– fueron configurando un escenario de crisis favorable a un desenlace acorde a la deriva neogolpista que buscaba destituir al presidente. El punto culminante ocurrió el 7 de diciembre de 2022, fecha en que el Parlamento debía votar la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Pocas horas antes de la votación, el presidente leyó un mensaje disolviendo el Congreso y llamando a constituir una Asamblea Constituyente en el más breve plazo. El mensaje no tuvo ningún efecto real, pues las fuerzas armadas y policiales ya no eran leales a él, pero fue aprovechado por la derecha para culminar su plan. El Congreso presentó los hechos como un autogolpe y actuó para sacarlo del poder aprobando una nueva moción de vacancia que vulneraba su propio reglamento.⁴ En simultáneo, siendo todavía presidente, Castillo fue retenido por su escolta policial mientras la Fiscalía ordenaba prisión preventiva, desconociendo los fueros que le asistían en un claro desacato a lo establecido por la Constitución. Ese mismo día, la hasta entonces vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, juramentó como presidenta designada, a la cabeza de un gobierno formado por los partidos que habían perdido las elecciones y boicoteado el gobierno del cual ella era parte.

Destituido Castillo, lo que seguía para la derecha neogolpista era restaurar el régimen neoliberal, neutralizando la reacción popular que rápidamente se expandía

⁴ Según lo anotado por el artículo 89-Ac del Reglamento del Congreso, la vacancia inmediata del Presidente de la República requiere de procedimientos formales tales como presentar una moción debidamente sustentada y contar con el voto de 107 congresistas sobre el total de 130. El 7 de diciembre no se presentó la moción y votaron a favor de la vacancia 101 congresistas. www.congreso.gob.pe.

en el país. Desde el 8 de diciembre del 2022 y hasta entrado marzo del siguiente año, el pueblo se volcó masivamente a las calles exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. La brutal represión, con un saldo dramático de más de sesenta asesinados y mil doscientos heridos, demostró la determinación de la coalición para retomar el poder y no dejarlo ir fácilmente. El cerrado respaldo al nuevo gobierno también se expresó en el blindaje a Boluarte ante denuncias de crímenes de lesa humanidad o corrupción por el intercambio de relojes rolex a cambio de presupuesto público. La deriva neogolpista de la derecha peruana había concluido anclando en un puerto seguro donde una sometida presidenta garantizaba el relanzamiento de la política neoliberal y la continuidad de los privilegios amenazados. Todo con el aval de los medios de comunicación y la comunidad internacional, particularmente los Estados Unidos y la Unión Europea, que dieron el espaldarazo final al nuevo régimen.

Epílogo temporal

La experiencia de la derecha peruana en su deriva deja múltiples lecciones sobre cómo las fuerzas conservadoras logran corromper y degradar un sistema democrático, hasta conseguir el cambio de las autoridades legítimamente electas. Hoy en Perú la sociedad tiene plena conciencia de que gobiernan quienes perdieron las elecciones a través de Dina Boluarte como una autoridad absolutamente funcional. La encuesta IPSOS del 30 junio del 2024 revela esta situación, pues una gran parte de la población considera a Keiko Fujimori (49%), César Acuña (48%) y Rafael López Aliaga (42%) como los principales socios de Dina Boluarte en el gobierno. Las políticas económicas favorables a relanzar el modelo neoliberal, como nuevas licencias para empresas mineras o la reestructuración del sistema de pensiones (AFP), confirman el carácter restaurador del régimen basado en una agenda de gobierno por la cual no votó la ciudadanía.

El neogolpismo ensayado por la derecha –y lamentablemente tolerado por las fuerzas políticas denominadas de centro e incluso centro izquierda– agrava mucho más la democracia peruana ensanchando la indignación y desafección de la ciudadanía. Este no es un proceso aislado, se ubica en un amplio contexto de exacerbación de contradicciones y conflictos de clase, así como en la deliberada determinación de desconocer la voluntad popular de los grupos subalternos. Es además un posicionamiento recurrente que debieron enfrentar las fuerzas democráticas, tal como hicieron las masivas protestas ocurridas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 contra la destitución de Pedro Castillo y las maniobras

del Congreso. La confusión del centro político que prefirió confiar en Boluarte, y el deliberado manejo informativo de los medios de comunicación, fueron claves para normalizar la imposición de un régimen que a todas luces carecía de la legalidad y legitimidad requeridas.

En Perú y Latinoamérica la deriva neogolpista muestra finalmente los límites de la democracia liberal, desafiando lo expuesto por las teorías neoinstitucionalistas que colocaban el énfasis en el rol de las fuerzas armadas para derrocar un gobierno. Hoy las fuerzas conservadoras utilizan la legalidad y las instituciones para dirimir el manejo del poder y el direccionamiento de la política de Estado, aprovechando el conocimiento del aparato público, su presencia en el poder judicial y su llegada a las fuerzas armadas y policiales. Es difícil predecir si surgirá en Perú una derecha democrática y respetuosa de las reglas de juego, incluso cuando se ven amenazados sus intereses de clase. Por lo pronto, son las grandes mayorías las que reclaman una democracia sustancial como forma política capaz de articular la participación y equidad social. Dependerá de la organización y movilización social alinear a la derecha peruana, tradicionalmente estamental y autoritaria, en el respeto al juego democrático sustantivo que supere viejas exclusiones aún vigentes.

Bibliografía

- América TV. 2021. “Arturo Arriarán: Una organización ha falseado los resultados del verdadero voto popular”. 21 de junio, <https://n9.cl/om4wh>.
- Cosamalón, Jesús y Francisco Durand. 2022. *La República Empresarial, Neoliberalismo, emprendedurismo y desigualdad*. Lima: Derrama Magisterial.
- Cotler, Julio. 1978. *Clases, Estado y Nación en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- De Soto, Hernando, en colaboración con Enrique Ghersi y Mario Ghibellini. 1986. *El otro sendero. La revolución informal*. Lima: Editorial El Barranco.
- Durand, Anahí. 2024. “Coaliciones golpistas, crisis de la democracia en la destitución de Pedro Castillo”. En *La crisis de la democracia en América Latina*, coordinado por Andrés Tzeiman y Danilo Enrico Martuscelli. Buenos Aires: CLACSO.
- IPSOS. 2024. Informe de Opinión, Perú, junio 2024. Ipsos Opinión y Mercado S.A. <https://n9.cl/6fvdxx>.
- López, Sinesio. 2010. “Estado y ciudadanía en el Perú”. En *El Estado en debate múltiples miradas*, Alberto Adrianzén Merino et al. Lima: PNUD.
- Martuscelli, Danilo. 2024. “Reflexões críticas sobre o debate em torno do neogolpismo na América Latina”. En *La crisis de la democracia en América Latina*, coordinado por Andrés Tzeiman y Danilo Enrico Martuscelli. Buenos Aires: CLACSO.

- OEA. Organización de Estados Americanos. 2021. Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú presenta informe preliminar. (11 de junio). <https://n9.cl/wf2ny>.
- ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. 2021. “Presentación de resultados. Elecciones generales y parlamento andino 2021. Resumen General”. [sitio web] Oficina Nacional de Procesos Electorales. Lima, Perú. <https://n9.cl/7049l>.
- Ojo Público. 2021. Portal de noticias e investigación. www.ojo-publico.com.
- Quijano, Aníbal. 2000. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*, compilado por Edgardo Lander. Buenos Aires: CLACSO.
- Quiroz, Alfonso W. 2013. *Historia de la corrupción en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos; Instituto de Defensa Legal.
- Thorne, Alfredo. 2019. “¿Cuerdas separadas?”. *El Comercio*. <https://n9.cl/rlq0hm>.
- Tirado, Arantxa. 2021. *Lafware, golpes de Estado en nombre de la Ley*. Barcelona: Ediciones AKAL.
- Tzeiman, Andrés y Danilo Enrico Martuscelli, coords. 2024. *La crisis de la democracia en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Willax Televisión. 2021. “Beto a Saber- La prueba del fraude es...”. Canal de You Tube: <https://n9.cl/vcy6t2>.